

**LA POBREZA COMO EFECTO DEL DESPLAZAMIENTO  
FORZADO: COMUNIDADES MARGINADAS EN OCAÑA,  
COLOMBIA**

**POVERTY AS AN EFFECT OF FORCED DISPLACEMENT:  
MARGINALIZED COMMUNITIES IN OCAÑA, COLOMBIA**

**LA PAUVRETÉ COMME EFFET DU DÉPLACEMENT FORCÉ :  
COMMUNAUTÉS MARGINALISÉES À OCAÑA, COLOMBIE**

**A POBREZA COMO EFEITO DO DESLOCAMENTO FORÇADO:  
COMUNIDADES MARGINALIZADAS EM OCAÑA, COLÔMBIA**

**¿Como citar este artículo?:**

(2021) La Pobreza como Efecto del Desplazamiento Forzado: Comunidades Marginadas en Ocaña, Colombia, *Desarrollo, Economía y Sociedad*, Vol 10.

**Resumen**

El desplazamiento forzado en la región del Catatumbo ha llevado a la conformación de asentamientos de víctimas del conflicto armado en Ocaña, Norte de Santander. Por lo anterior, con el propósito de comprender el proceso de adaptación de estas familias en su nuevo territorio, esta investigación describe las condiciones de vida de la población desplazada desde una óptica de la pobreza multidimensional. Para ello, se realizaron 60 entrevistas a familias vinculadas a la Asociación de Desplazados de la Provincia de Ocaña (ASODEPO) en el año 2018. Los resultados permitieron analizar las dimensiones de salud, educación y vivienda, donde se evidencia que, en cada una de las familias, la situación de desplazamiento genera privación de capacidades que margina a estas comunidades a entornos de pobreza.

**Palabras clave:** desplazamiento forzado, víctimas del conflicto, pobreza multidimensional, urbanización.

1 Magíster en educación. Licenciado en matemáticas. Contador Público. Docente del programa de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Investigador del grupo: Región y Desarrollo – REDES. E-mail: yamolina@jdc.edu.co. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2900-5652>

2 Estudiante de IX semestre de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Integrante del semillero de Investigación: Otras Realidades Contables. E-mail: kbaron@jdc.edu.co. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3833-6592>

## Abstract

Forced displacement in the Catatumbo region has led to the formation of settlements for conflict victims in Ocaña, Norte de Santander. Therefore, to understand the adaptation process of these families in their new territory, this research aims to describe the living conditions of the displaced population from a multidimensional poverty perspective. For this purpose, 60 interviews were conducted with families linked to the Association of Displaced People of the Province of Ocaña (ASODEPO) in the year 2018. The results allowed for the analysis of dimensions such as health, education, and housing, revealing that, in each of the families, the displacement situation leads to a deprivation of capabilities that marginalizes these communities into poverty-stricken environments.

**Keywords:** forced displacement, conflict victims, multidimensional poverty, urbanization.

## Résumé

Le déplacement forcé dans la région de Catatumbo a conduit à la formation de colonies de victimes du conflit armé à Ocaña, dans le département de Norte de Santander. Ainsi, dans le but de comprendre le processus d'adaptation de ces familles dans leur nouveau territoire, cette recherche décrit les conditions de vie de la population déplacée du point de vue de la pauvreté multidimensionnelle. Pour ce faire, 60 entretiens ont été menés avec des familles liées à l'Association des Déplacés de la Province d'Ocaña (ASODEPO) en 2018. Les résultats ont permis d'analyser les dimensions de la santé, de l'éducation et du logement, mettant en évidence que, dans chacune des familles, la situation de déplacement entraîne une privation de capacités qui marginalise ces communautés dans des environnements de pauvreté.

**Mots-clés :** déplacement forcé, victimes du conflit, pauvreté multidimensionnelle, urbanisation.”

## Introducción

Para finales del 2021, de acuerdo con el documento de Tendencias Globales de la Agencia de la ONU para los Refugiados - ACNUR, la cantidad de individuos desplazados a raíz de “las guerras, la violencia, la persecución y las violaciones a los derechos humanos ascendía a 89,3 millones, es decir, un 8% más en comparación con el año anterior” (ACNUR, 2022, párr. 2). El desplazamiento forzado como una de las consecuencias del conflicto armado, es considerado como una barrera para el desarrollo social y económico de una sociedad, en especial, de aquellas que han sentido los rigores de conflictos internos armados, donde operan grupos al margen de la ley en diferentes campos de acción.

En Colombia, el desplazamiento forzado se encuentra presente en la memoria colectiva de sus habitantes, debido a que millones de colombianos han tenido que abandonar, de manera obligatoria, diferentes vínculos materiales y sobre todo afectivos que tenían en su entorno de origen. Esta experiencia deja inmensas huellas que, en algunos casos, suelen sanar; pero, en la gran mayoría, dejan secuelas imborrables que siempre serán parte del diario vivir.

Por otra parte, y como consecuencia de este flagelo, el desplazamiento forzado ha precedido al crecimiento urbano de manera vertiginosa con la conformación de grandes barrios en

las ciudades, pueblos y corregimientos en el territorio colombiano, esto ha desarrollado un desbordamiento de necesidades que han traído consigo problemas de tipo social, como violencia, robo, delincuencia, entre otros; también, de tipo económico local al exigir un mayor presupuesto para atención, reorganización de planeación municipal, modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial - POT, entre otros. Frente a las problemáticas mencionadas, la intervención del Estado a nivel nacional, departamental y municipal, ha desconocido las particularidades de cada una de las regiones, por lo tanto, esta investigación refleja a profundidad las condiciones socio-económicas de las familias víctimas de desplazamiento forzado de Ocaña, con la finalidad de generar un insumo para la futura formulación de políticas públicas.

### **El desplazamiento forzado en Colombia**

Según Chávez et ál. (2003), en Colombia, el desplazamiento forzado interno ha sido considerado en dimensiones que preocupan la dinámica de desarrollo social en todo el territorio colombiano, generando así un gran detrimento de la seguridad interna por toda la geografía nacional. El Estado colombiano a través de la historia, dentro de su organización de ordenamiento territorial y con el fin de subsanar el creciente desplazamiento, ha tenido la intención de fortalecer la integralidad y desarrollo económico con la puesta en marcha de programas de vivienda como el Instituto de Crédito Territorial de los años 50.

En los años 1948 a 1965, como resultado de las luchas fratricidas entre los militantes de partidos políticos como el liberal y el conservador, se realizaron estudios sobre el fenómeno urbano con una óptica muy reducida a los problemas de las barriadas marginales, a las cadenas crecientes de miseria, a las viviendas de interés social no dignas en su estructura física que conllevó a la creación de grandes tugurios o comunas; todos estos y otros más fueron focalizados hacia esos

pobladores víctimas de la violencia armada del país. No obstante, según se nota actualmente, se dejó de lado el resto de la vida urbana: los espacios públicos, el desarrollo de la vida colectiva, la integración a la vida ciudadana del campesino, factores que hacen de las ciudades un sistema integral de desarrollo humano.

Ya para los años 80, los nuevos problemas derivados del desplazamiento forzado generaron una inversión en viviendas con falta de adecuación, servicios públicos incompletos y de mala calidad, se comenzaron a ofertar servicios de salud insuficientes e ineficientes junto con la educación, escasez en dotación deportiva, recreativa y cultural, el ambiente urbano comienza a ser afectado, surgió además el narcotráfico y delincuencia de gran impacto. Ya para nuestros días, podemos encontrar viviendas de interés social que no cuentan ni siquiera con lo necesario para poder desarrollar un proceso habitacional para familias desplazadas, no solo por los materiales usados que, entre otras cosas, no son los mejores, sino también por las dimensiones longitudinales que conforman estas construcciones (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 51).

Respecto al tema, Granada destaca que en Colombia se han presentado, y aun se siguen presentando, conflictos armados no homogéneos entre regiones, lo cual hace que se configure una tendencia de cambios estructurales en la sociedad, teniendo como protagonistas a diferentes grupos armados: “Entre 1996 y 2002 el desplazamiento es usado principalmente por los grupos paramilitares [...], entre 2003 y 2006 son las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército los principales generadores de desplazamiento” (2008, p. 4). Posteriormente, a partir del 2016, se desarrolla la implementación de un proceso de paz con el grupo guerrillero más grande de Colombia: FARC y el Gobierno Nacional, con el fin de mitigar la ola de violencia durante casi medio siglo.

Asimismo, en Colombia se reconoce que las crisis humanitarias se encuentran en una relación entre el nivel de desplazamiento y la prolongación de la violencia que vive internamente, en especial en las zonas rurales, donde el campesino es el principal afectado (Bello, 2004). A pesar de los grandes esfuerzos que se han venido adelantando a nivel gubernamental, los cambios han sido muy someros debido al fortalecimiento de otros grupos armados al margen de la ley quienes buscan tomar el territorio de influencia dejado por las FARC (Kroc Institute, 2017, 2018). Por lo tanto, a pesar de los esfuerzos infructuosos del Gobierno colombiano, se encuentra todavía un alto índice de desplazamiento forzado hacia las urbes nacionales, siendo esta la intención de tratar de subsanar necesidades básicas de manera directa como resultado del conflicto armado y el deterioro de las condiciones socioeconómicas.

Lo anterior genera un criterio muy importante en relación con la disposición del lugar de destino de quienes buscan un mejoramiento en su calidad de vida con la esperanza de encontrar un sitio o lugar que les permita sobrevivir; es por ello que, Rubiano (2011) establece que el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas entra en decrecimiento a medida que el tamaño municipal aumenta con el tipo de población que poco genera beneficio económico, sino que al contrario demandan ayuda o auxilio por parte de los entes municipales en su situación de desplazamiento, los cuales están en la obligación de atender. Además de las dificultades económicas derivadas del desplazamiento forzado, se hallan otras de índole emocional como el miedo y barreras en la socialización, que en muchos casos impiden el desarrollo total de individuos dentro de la “nueva” sociedad de adaptación.

A modo de recuento histórico, de acuerdo con el informe de tendencias globales (ACNUR, 2016), Colombia se ubicaba en el segundo país con mayor número de desplazamiento, con 1 desplazado por cada 10 habitantes llegando

a 7,7 millones. Frente a los datos del Registro Único de Víctimas del Gobierno Colombiano, al 30 de octubre de 2017, el país registraba aproximadamente 8,5 millones de víctimas, lo que equivale al 18 por ciento de la población. Igualmente, se evidencian más de 260.000 homicidios, 46.000 personas desaparecidas y 7,4 millones de personas forzadas a abandonar sus hogares a otras zonas del país. ACNUR reportó 47 emergencias en Colombia (incluyendo desplazamientos masivos, confinamiento o restricción de movilidad), que afectaron a casi 14.000 personas en 2016. Más de dos tercios de las personas afectadas eran parte de la población indígena, y el resto fueron afrocolombianos y campesinos.

Además, en 2016, el Gobierno registró individualmente más de 68.000 nuevas personas desplazadas internamente (PDI); cifra que, según se prevé, seguirá creciendo debido al lento proceso de registro y verificación (ACNUR, 2017). En promedio, 20 personas por minuto huyen de sus hogares y buscan la protección en otro lugar, dentro de su territorio o en otros países. La población mundial de personas desplazadas a la fuerza, aumentó significativamente en los últimos 20 años, pasando de 33,9 millones en 1997 a 65,6 millones en 2016 (ACNUR, 2016).

Pese a que, para el 24 de noviembre de 2016, Colombia firma un Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y las FARC; tras cuatro años de intensos procesos de negociación, las cifras de 2021 de desplazamiento forzado continúan subiendo:

Colombia, lamentablemente, sigue siendo el país con mayor número de desplazados internos. En total, según ACNUR han sido 8,3 millones de víctimas reportadas en el país, esto considerando las cifras del Registro Único de Víctimas desde 1985. Esta cifra supera por mucho a países como Etiopía, Sudán, Mozambique, Yemen y Afganistán. Después de Colombia está Siria con 6,7 millones

de desplazados. (Infobae, 2021, párr. 4-5)

Grasa, tras su análisis prospectivo, declara que dicho acuerdo ha sido abordado desde distintos aspectos tanto positivos como negativos a nivel internacional y en el país. A nivel internacional, ha sido elogiado:

Al constituir la única buena noticia en un momento en que escaseaban los éxitos en gestión de conflictos y cuando la agenda sobre el consenso de la paz liberal surgida en los años noventa en Naciones Unidas recibía cada vez más críticas, tanto por su carácter demasiado occidental-céntrico y reduccionista, como por los escasos resultados constatables obtenidos a la luz de la evaluación de dos décadas de resultados. (2020, p. 8).

En últimas, es posible colegir que, pese a estos importantes esfuerzos tras el acuerdo, Colombia aún mantiene situación de desplazamiento, en tanto que los grupos armados de Colombia continúan su disputa por el botín de la paz (International Crisis Group, 2017), persisten los asesinatos, reclutamiento de menores de edad, y las precarias condiciones de poblaciones rurales que han sido víctimas del conflicto y que su acceso a servicios públicos, sanidad, educación, movilidad sigue siendo limitado. El desplazamiento ha generado un cambio económico dentro de la sociedad colombiana, el gobierno (sea nacional, departamental o municipal) ha tenido siempre la necesidad de modificar y, en algunos casos, cambiar el rumbo de su actuar para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales por medio de políticas públicas.

### **Configuración social del desplazamiento en Ocaña**

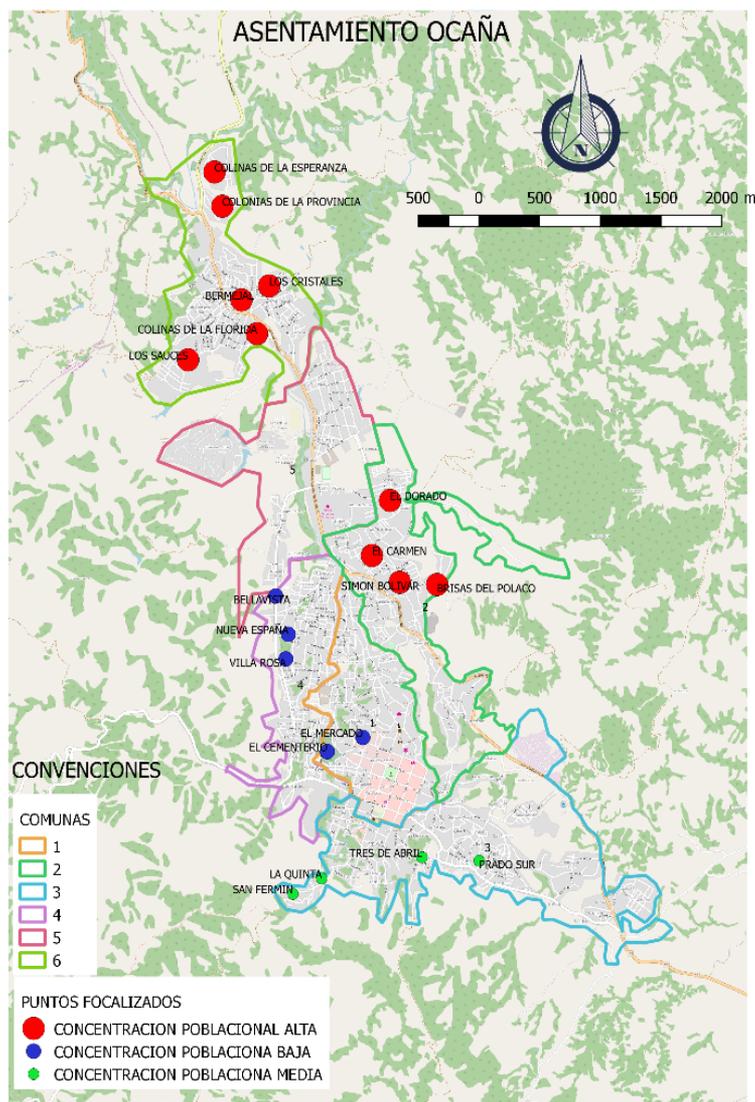
Todos estos factores han incidido en la economía de las familias víctimas de los conflictos armados que ha tenido nuestro país, ya que su desarrollo

económico ha sido fragmentado en muchos casos con la diseminación de núcleos familiares, lo que conlleva a tener algunas situaciones de tipo financiero que acongojan estas familias. Principalmente, por ser en su mayoría población campesina desplazada forzosamente que proviene de zonas ricas en recursos minerales y de amplias extensiones de tierras fértiles, perdiéndose las prácticas y el conocimiento en la gestión y uso del territorio (Ocampo et ál., 2017).

Ocaña, que hace parte del departamento de Norte de Santander y se encuentra ubicado en el nororiente del territorio colombiano, sobre la cordillera oriental y a 1202 metros sobre el nivel del mar, con una extensión territorial de 672,27 km<sup>2</sup>, equivalente al 0.0541 % del país y el 2.76 % departamental y una población de 99,741 habitantes al 2017; es un centro urbano clave dentro de este proceso de desplazamiento forzado por el conflicto armado que se desarrolla en Colombia, ya que es considerado como el centro económico de la región del Catatumbo, y eje de desarrollo para el sur de Cesar y sur de Bolívar; es por ello que no ha sido un municipio aislado de la situación de recepción de desplazados, lo cual crea en medio de la sociedad ocañera una carga social y económica que redundando en el interior de cada familia víctima del flagelo del desplazamiento.

A 27 de octubre de 2017, el Registro Único de Víctimas - RUV indicaba la existencia de 30.001 víctimas registradas en Ocaña, las cuales se encontraban ubicadas en las diferentes comunas del municipio. En la figura 1, se observa la focalización actual de asentamientos de familias víctimas del desplazamiento forzado en la ciudad de Ocaña, en la que se describe la concentración poblacional, de la que se desprende información relevante en la alta concentración en las comunas ubicadas en la zona periférica del sector urbano, especialmente en las comunas 2 y 6, cuyos habitantes se encuentran entre los estratos 1 y 2.

**Figura 1.**  
Focalización de asentamientos de desplazados en Ocaña.



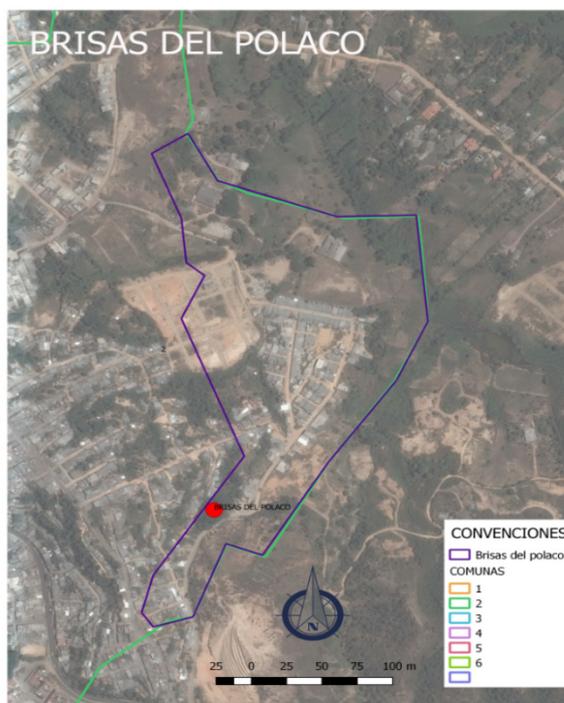
## Metodología

La presente investigación es de tipo cualitativa. El trabajo de campo empleó técnicas etnográficas como la observación y las entrevistas semi-estructuradas, que permitieron a los investigadores adaptar los planteamientos teóricos a una realidad desconocida para los mismos (Van Maanen, 1993).

Es así que, en el presente trabajo, para analizar las dimensiones de pobreza de las familias víctimas del desplazamiento forzado en la región del Catatumbo, se tomó como objeto de estudio 60 familias que pertenecen a ASODEPO

(Asociación de Desplazados de la provincia de Ocaña), dado que es la organización que agrupa el mayor número de víctimas en dicho municipio. Estas se encuentran principalmente asentadas en el barrio Brisas del Polaco en el sector nororiental Comuna 2 del Municipio, que como se observa en la figura 2, se halla en una ubicación de difícil acceso con calles no pavimentadas, lo que evidencia la marginación de sus habitantes del resto de la ciudad.

**Figura 2.**  
Asentamiento urbano Brisas del Polaco.



Por otra parte, con el fin de establecer una relación objetiva entre el sujeto investigador y el objeto investigado, se mantuvo presente un ejercicio de reflexividad que llevó a desarrollar un análisis crítico de las dimensiones socioeconómicas de las familias entrevistadas respecto a sus condiciones de desplazamiento forzoso. Como dimensiones se seleccionaron las tres contempladas por el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), propuesto por Oxford Poverty and Human Development Initiative, a saber: salud, educación y vivienda, ya que este indicador ha sido ampliamente aceptado como una fuerte herramienta para el desarrollo de políticas focalizadas en la reducción de pobreza (Altamirano y Damiano, 2017).

De tal forma que, la comprensión de estas dimensiones ajustadas a criterios de desplazamiento forzado, se realizó por medio del análisis del discurso, para lo cual se hizo necesaria la ejecución de entrevistas que permitieran obtener información consistente con las dimensiones establecidas por los investigadores. Con ello, se elaboró un análisis

crítico que evidenciara la naturaleza de las condiciones de vida de las familias víctimas del conflicto asentadas en Ocaña, Norte de Santander.

## Resultados

A continuación, se presenta el análisis por cada una de las tres dimensiones teniendo en cuenta la información recolectada en el trabajo de campo.

### Dimensiones de la pobreza

Hablar de pobreza no puede limitarse a un criterio monetario, ya que, aunque un individuo tenga los recursos financieros para cubrir sus necesidades básicas, este también necesita de acceso a infraestructura requerida, adecuada y disponible que satisfaga condiciones de calidad de vida de las personas (Noglo, 2016). El no tener escuelas cerca al lugar de residencia, limita el acceso a servicios de educación; así mismo, la carencia de hospitales con capacidades para atender enfermedades crónicas o terminales, pone en condiciones marginales a determinadas comunidades e

individuos. Tal como lo expresa un joven: “Por acá no llegan los buses, toca caminar mucho o coger mototaxi para ir a cualquier lado” (E5), reafirmando las dificultades de la comunidad para acceder a la infraestructura pública de la ciudad, dado que carecen de acceso al servicio de transporte público cercano y de vehículo propio, lo cual aísla aún más a la comunidad.

De ahí, que la pobreza debe considerar aspectos tanto materiales y económicos como los no materiales, por lo que debe analizarse la falta de ingresos, necesidades insatisfechas, deficiencias en las condiciones de vida, exclusión social y cultural, privación de los derechos y carencia de oportunidades (Plazas, 2010). Lo anterior conlleva que el análisis de la pobreza se extienda a múltiples dimensiones, entre las que se resaltan los derechos como la dignidad humana, la solidaridad, la libertad y la igualdad, así como análisis sobre las condiciones de la vida entre las que se encuentran la salud, la educación, la alimentación, la participación social (CEPAL, 2013). Pese a lo anterior, y aunque los entrevistados pertenecen a ASODEPO, muchos de ellos desconocen de qué forma pueden mejorar sus condiciones, “yo solo vengo para ver si tengo ayudas del gobierno” (hombre mayor, E12).

Sin embargo, no existe un consenso de cuáles deben ser las dimensiones de la pobreza o cómo esta debe medirse, debido a que, para cada comunidad o investigador, la concepción y valor de cada dimensión o capacidades puede variar; no obstante, el definir claramente las dimensiones permite establecer instrumentos precisos para el análisis de la pobreza (Alkire, 2007).

Por lo tanto, el análisis de la pobreza multidimensional se ajusta a las necesidades de las poblaciones vulnerables, para incentivar la generación de planes, programas y proyectos que permitan una mejor distribución de los recursos en pro del bienestar de la población (Angulo et ál., 2011). Además de definir criterios coherentes con el entorno en la selección de alternativas

de los proyectos sociales, que permitan la reducción de pobreza (CEPAL, 2013).

### **Familias víctimas del conflicto en Ocaña**

En diálogo con las víctimas, estas manifiestan que su desplazamiento se vio principalmente por la violencia vivida en sus regiones, situación que generaba temor en sus habitantes quienes eran constantemente amenazados. Si bien en Ocaña se encuentran asentadas familias provenientes de departamentos como: Cesar, Córdoba, Bolívar, Magdalena, entre otros, la mayoría de ellas son originarias de los distintos municipios de Norte de Santander, especialmente de la región denominada Catatumbo, “yo tenía mi finquita, pero llegó la guerrilla, mataron a mi hijo y me dijeron que me tenía que ir” (mujer mayor, E8).

Los municipios del Catatumbo tienen una fuerte tradición agrícola, por lo cual los desplazados provenientes de esta zona eran principalmente campesinos, quienes se dedicaban a trabajar la tierra, criar animales y cuidar los niños. Sin embargo, actualmente estas personas se dedican a labores de servicio doméstico, oficios varios y trabajos informales. Todavía una pequeña parte realiza actividades agrícolas, pero al mismo tiempo se evidencia un alto grado de desempleo e informalidad, “Yo me las arreglo haciendo arreglitos por ahí con los vecinos” (hombre mayor, E37).

La mayoría de estas familias llegaron al municipio entre 10 a 15 años atrás, tiempo que ha permitido el establecimiento de asentamientos legales y la consolidación de asociaciones que los represente ante el gobierno, esto último ha permitido un mayor acceso a subsidios para esta población. No obstante, sus condiciones de vida no son las más idóneas.

### **La pobreza como condición del desplazamiento forzado**

Como mencionamos, el propósito del estudio

es analizar las privaciones que ha causado el desplazamiento forzoso en relación con las dimensiones de salud, educación y vivienda.

Respecto a la dimensión salud, varios entrevistados indican que sus familiares e incluso ellos mismos sufren de alguna enfermedad, principalmente asociada a condiciones de limitaciones motrices, que les imposibilita realizar determinadas actividades. Tal como lo manifestaba un miembro de la comunidad, “No puedo realizar esfuerzo para cargar cosas, así que solo puedo trabajar en algunos recados que me pide la gente” (E23), aunque indicó que ha podido hacer controles médicos. Debido a la violencia, él ha perdido sus familiares y no cuenta con personas que puedan cuidar de él; en consecuencia, su capacidad para generar ingresos y atender sus deficiencias de salud se ven limitadas.

Por su parte, en temas de alimentación son pocos los que indican un consumo menor a tres raciones diarias de comida, donde las personas logran diariamente ingerir alimentos y, pese a que no evalúan la capacidad nutricional de estos alimentos, el hambre no es la preocupación mayor en la población.

Ahora, cuando se indaga acerca del acceso y nivel educativo de los habitantes, se resalta principalmente las condiciones en los menores de edad y en las cabezas de hogar. En cada familia tenían generalmente entre uno y tres niños. Los niños pequeños menores de 5 años normalmente se encontraban en la casa y no recibían algún tipo de educación, mientras que los mayores de 5 años que se encontraban estudiando presentaban rezagos estudiantiles, dado que acorde a la edad ellos cursaban grados inferiores. Esta situación se debía a que el desplazamiento había interrumpido con el proceso de formación, tal como una madre indicó: “el niño estaba estudiando en la vereda, pero cuando nos tocó salir, él no pudo continuar ese año” (E51).

Por otra parte, la cabeza del hogar mayoritariamente oscila entre los 30 y 50 años, cuyo grado máximo promedio de educación es primario. Incluso, muchos de ellos no tienen educación alguna. Por ende, la posibilidad de conseguir trabajo es poca y de baja remuneración. Además, los saberes adquiridos en el campo se vuelven obsoletos dejándolos en condiciones más vulnerables, una señora mayor decía “yo vivía de criar animalitos en mi ranchito” (E46), actividad que ya no puede realizar y, por ende, su conocimiento no puede ser aplicado.

Así mismo, encontramos mujeres que antes de su desplazamiento se dedicaban a cuidar sus hogares, pero, tras la muerte violenta de familiares, entre ellos sus compañeros, tuvieron que dejar sus hogares y sin ningún estudio previo llegaban a la ciudad buscando empleos relacionados principalmente con servicios domésticos, “yo llegue a buscar trabajo y pude hacer unos aseos en casas de familia, con la muerte de mi marido es lo único que he podido hacer” (E21). La falta de educación y la pérdida de un familiar aportante al sustento del hogar, privan la capacidad de generar ingresos de la familia, así como descuidan las necesidades de sus hogares, dada las circunstancias a las que son sometidas.

Finalmente, se analizó las condiciones en las que habitan estas familias, las cuales en su mayoría están en arriendo en viviendas con pisos en cemento y acceso a los distintos servicios públicos, agua potable, alcantarillado, luz, gas y recolección de basuras. Sin embargo, encontramos beneficiarios de programas gubernamentales, “gracias a Dios, el gobierno me regaló esta casita y aquí vivo” (mujer, E17). Igualmente, cuentan con los electrodomésticos como estufas, televisores y, en menor medida, las neveras. No obstante, se observó que carecen de equipos de cómputo y conexión a Internet, “a veces recargo el celular para poder entrar a internet desde el celular” (mujer, E14), condición que limita el acceso a la información y posibilidades de autoformación, ya sea formal

o no formal, desde plataformas virtuales.

### **Conclusiones**

La migración del campo a la ciudad es una de las principales razones de la expansión urbana, pero cuando este desplazamiento se ha dado en condiciones de violencia, los centros urbanos se ven enfrentados a la recepción de comunidades en condiciones de pobreza, es así que esta problemática ha traído un fuerte impacto social, demográfico, cultural y económico a la población ocañera que ha sufrido este fenómeno.

Por otra parte, los desplazamientos se originaron por amenazas, miedo a los enfrentamientos, masacres, familiares asesinados, etc. Esta situación hace que el abandono de propiedades y pérdida de familiares ocasionaran una carencia económica y emocional en las familias campesinas víctimas del conflicto armado provenientes del Catatumbo, quienes, con el deseo de rehacer sus vidas, se han desplazado a las principales ciudades del departamento donde esperan acceder a la prestación de servicios sociales, como salud y educación que les permita alcanzar condiciones dignas de vida.

No obstante, el aumento continuo de la población desplazada en Ocaña exige una mayor presión sobre los entes públicos, para proveer servicios sociales como vivienda, salud educación y saneamiento básico, pero con una infraestructura insuficiente para cubrir estas necesidades. Se evidencia una modificación de la dinámica cultural urbana de la ciudad.

Es así, que se señala como las características más críticas del desplazamiento en Ocaña, la deficiencia de prestación de servicios sociales a las personas víctimas de la violencia y la atención integral que se les brinda a éstas mismas, ya que la mayoría de las políticas se han centrado en procesos asistenciales y no de transformación social. El bajo nivel de escolaridad y la carencia de habilidades laborales, detectadas en la población desplazada, reflejan una alta incidencia como dificultad de encontrar empleo digno en las actividades productivas propias de la ciudad, donde los saberes adquiridos en el campo se vuelven inservibles en su nuevo entorno urbano.

Esta situación crea una priorización en la implementación de programas especiales de educación para estas comunidades, que reduzca la brecha en el acceso a oportunidades laborales de los desplazados. Entre las temáticas de los programas educativos, se debe hacer énfasis en el fortalecimiento del buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación - TIC, que permita generar mayores oportunidades en la obtención de empleo y les garantice mayor nivel de ingresos para subsanar las deficiencias de su calidad de vida. Esta investigación aporta la información necesaria para conocer la situación que viven las familias víctimas del desplazamiento forzado, para que entes gubernamentales y no gubernamentales puedan desarrollar planes de acción referentes a la temática, con el objetivo de proporcionar una información relevante y una propuesta de acción encaminada a que la economía de estas familias no se vea tan afectada y se puedan suplir necesidades básicas para un desarrollo social sostenible.

## Referencias

pdf

- ACNUR. (2016). Tendencias Globales - Desplazamiento forzado en 2016. <http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2017/11152>
- ACNUR. (2022, 16 de junio). ACNUR: Las cifras de desplazamiento forzado en el mundo alcanzan un nuevo máximo y confirman una década de incrementos. <https://www.acnur.org/noticias/press/2022/6/62aa42164/acnur-las-cifras-de-desplazamiento-forzado-en-el-mundo-alcanzan-un-nuevo.html>
- ACNUR. (2017). Actualización de la situación Colombia.
- Alkire, S. (2007). Choosing dimensions: the capability approach and multidimensional poverty. Oxford Poverty & Human Development Initiative.
- Altamirano, Á. y Damiano, K. (2017). Multidimensional Poverty in Nicaragua: Are Female-Headed Households Better Off? *Social Indicators Research*, 132, 1037-1063. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-016-1345-y>
- Angulo, R., Díaz, Y. y Pardo, R. (2011). Índice de Pobreza Multidimensional para Colombia. Departamento Nacional de Planeación.
- Bello, M. (2004). El desplazamiento forzado en Colombia: acumulación de capital y exclusión social. *Revista Aportes Andinos: Globalización, Migración y Derechos Humanos*, (7), 1-8. <https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/613>
- CEPAL. (2013, 17 de abril). La medición multidimensional de la pobreza. <http://www.cepal.org/deype/noticias/documentosdetrabajo/5/49665/LCL3615e>.
- Constitución Política de Colombia (1991). Artículo 51. *Gaceta Asamblea Constituyente de 1991 N° 85*. <http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica>
- Granada, M. (2008). Caracterización y contextualización de la dinámica del desplazamiento. Documentos CERAC.
- Grasa, R. (2020). Colombia cuatro años después de los acuerdos de paz: un análisis prospectivo. Documentos de trabajo (Fundación Carolina): Segunda época, (39), 1-26.
- Infobae. (2021, 18 de junio). Colombia, el país con mayor número de desplazados internos en el mundo según Acnur. Infobae. <https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/18/colombia-el-pais-con-mayor-numero-de-desplazados-internos-en-el-mundo-segun-acnur/>
- International Crisis Group. (2017). Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz. Informe sobre América Latina, n.º 63, Bruselas, ICG.
- Kroc Institute. (2017). Informe sobre el estado efectivo de implementación del acuerdo de paz en Colombia. Nôtre Dame; Kroc Institute.
- Kroc Institute. (2018). Segundo informe sobre el estado efectivo de la implementación del acuerdo de paz colombiano. Nôtre Dame; Kroc Institute.
- Noglo, Y. (2016). Non-monetary poverty in Togo: a multidimensional approach. *Review of Social Economy*, 75(2), 181-211. <https://doi.org/10.1080/00346764.2016.1219385>
- Ocampo, M., Chenut, P., Férguson, M. y Martínez, M. (2017). Territorialities in transition: population displaced by the violence of the

Colombian armed conflict resignifying the territory. *Psicologia USP*, 28(2), 165-178.

Plazas, C. (2010). La dimensión de la pobreza. *Revista de Estudios Jurídicos*, (10), 1-16. <https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej/article/view/550>

Rubiano, N. (2011). Ciclo político de los negocios y tamaño municipal: Colombia 1989-2008. *Revista de Economía Institucional*, 13(25), 105-136. [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_rtext&pid=S0124-59962011000200005](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_rtext&pid=S0124-59962011000200005)

Van Maanen, J. (1993). Secretos del oficio: Sobre escribir en etnografía. *Revista Colombiana de Sociología*, 2(1), 48-68.